



Noviembre | 14
2013

Serie Informe

JUSTICIA

El Costo de la Delincuencia en Chile: 2000-2012

José Francisco García G.
Eliana Claro E.
Sammy Drobny A.

ISSN 0718-4220

José Francisco García G. es doctor y master en Derecho, Universidad de Chicago. Abogado, magíster y licenciado en Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile. Coordinador de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo.

Eliana Claro E. es ingeniera comercial con mención en administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es investigadora asociada de Libertad y Desarrollo.

Sammy Drobny es cientista político y licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ayudante de investigación de Libertad y Desarrollo.

Indice

Resumen Ejecutivo	5
1. Introducción y Aspectos Metodológicos	7
2. Composición del Costo de la Delincuencia	8
2.1 Sector Público 2000-2012	8
2.2 Sector Privado 2000-2012	17
2.3 Costo Total de la Delincuencia 2000-2012	20
3. El Desafío de la Eficiencia: Programas Basados en Evidencia y Evaluación	23
3.1 Victimización y Flujo Penal	24
3.2 Mirada Comparada	31
3.3 Evaluación	32
4. Conclusiones	34
5. Referencias Bibliográficas	36

Resumen Ejecutivo

El presente estudio tiene como objetivo calcular el costo que tuvo para el país la delincuencia en el periodo comprendido entre los años 2000 a 2012, considerando tanto el costo para el sector público como para el privado. Se continúa así con la serie de otras investigaciones que, en esta materia, ha llevado a cabo Libertad y Desarrollo en los últimos años. Este documento utiliza como base la metodología de trabajos anteriores de Libertad y Desarrollo.

El costo total de la delincuencia en Chile para el año 2012 llega a los \$ 2.908.072 millones o US\$ 5.978 millones, lo que representa un gasto per cápita de US\$ 343 y aproximadamente un 2,23% del PIB. Asimismo, es relevante notar que en 2000 este costo total llegaba a los \$ 1.069.365 millones o US\$ 2.198 millones, y desde la perspectiva per cápita llegaba a los US\$ 142,76. Lo anterior implica que el costo total de la delincuencia aumentó entre los años 2000 y 2012 en un 172 %.

Si se analiza la composición de este costo, puede observarse que en 2012 aquel que corresponde al sector público llegó a los \$ 1.848.948 millones o US\$ 3.801, aumentando en 188,1% respecto del año 2000, cuando llegó a los US\$ 1.319 millones. Si se analiza el gasto público per cápita este pasa desde los US\$ 86 en 2000 a los US\$ 218 en 2012.

Igualmente, si desagregamos el gasto público por institución, el año 2012 vemos que los mayores recursos públicos han sido asignados a Carabineros de Chile con US\$ 1.590 millones (41,8%); a Gendarmería con US\$ 532 millones (14%); Policía de Investigaciones (PDI) con US\$ 396 (10,4%); Secretaría y Administración General del Ministerio de Justicia con US\$ 362 millones (9,5%); Ministerio Público con US\$ 240 millones (6,3%) y SENAME con US\$ 212 millones (5,6%).

Por su parte, el gasto privado en delincuencia llegó el 2012 a los \$ 1.059.124 millones o US\$ 2.177 millones, aumentando respecto del año 2000 en un 147,6%, cuando este costo llegó a los \$ 427.610 millones o US\$ 879 millones.

Asimismo, si se analiza la participación relativa del sector público y privado en el costo total de la delincuencia, es posible observar que esta ha experimentado algunas variaciones en el tiempo, aunque dentro de ciertos márgenes. Si analizamos el año 2000 vemos que la participación relativa del gasto público respecto al gasto total es de 60%, versus un 63,6% durante 2012.

El Costo de la Delincuencia en Chile: 2000-2012

1. Introducción y Aspectos Metodológicos

La presente investigación se suma a trabajos anteriores equivalentes realizados por la Fundación Paz Ciudadana y Libertad y Desarrollo¹. Se trata de la misma metodología, pero en especial corresponde a la existente desde el trabajo de Libertad y Desarrollo de 2008², año en que perfeccionamos la serie con algunas modificaciones³. Este año, hemos agregado el presupuesto de SENDA (ex CONACE) para sofisticar aún más el esfuerzo⁴. En todo caso, se ha cuidado de mantener la capacidad de comparación de estos estudios, uno de los principales valores de la serie.

En términos generales estas investigaciones han buscado estimar una serie de gastos en los que incurren las personas y el Estado para enfrentar el problema de la delincuencia y que son susceptibles de ser cuantificados. Siguiendo los informes anteriores, los costos de la delincuencia se presentan en dos grandes categorías: **(1) Costo Público**, el cual se ha desagregado entre (a) costos en prevención y disuasión; (b) costos de investigación de los delitos e identificación de los culpables; y (c) costos en sanción, rehabilitación y reinserción; y **(2) Costo Privado**, el cual se ha desagregado entre (a) costos en prevención y disuasión; y (b) otros costos privados.

Lo que se busca con la investigación es hacer la mejor estimación posible de los costos incurridos en el combate a la delincuencia, de manera de lograr una aproximación a la realidad actual, pese a que existe una serie de costos que no han sido incorporados por la dificultad de la estimación. En efecto, la falta de información adecuada o las imposibilidades técnicas o conceptuales para cuantificar

¹ Los primeros estudios en materia de costo de la delincuencia en Chile fueron dados a conocer por la Fundación Paz Ciudadana (1995 y 1997). El primero estimó que este llegaba en 1994 a US\$ 1.290 millones. Dos años más tarde, haciendo la estimación de 1996, se mostró que había aumentado a US\$ 1.480 millones. Libertad y Desarrollo, continuando con la misma metodología, dio a conocer estudios en esta materia en 2001, 2003, 2008, 2009 y 2011. En este último se estimó que el costo de la delincuencia en 2010 superó los US\$ 4.478 millones. Otros estudios que han destacado son los de Olavarría (Ministerio del Interior y Universidad de Chile, 2005), y los Estudios de Oferta Privada de Seguridad de la Consultora Leemira (2004, 2005, 2006, 2008 y 2011), que sofisticaron bastante, para efectos de nuestra investigación, la manera de calcular el costo privado de la delincuencia en Chile.

² Serie Informe Político N° 106: "El Costo de la Delincuencia en Chile 1990-2007", junio 2008.

³ En cuanto al fondo, se introdujeron modificaciones relevantes en el cálculo del costo privado. En este sentido, se han utilizado las estimaciones de los estudios de oferta privada de seguridad de Lee Mira, en lo que tradicionalmente habríamos considerado como gasto privado en prevención; y por otro lado, hemos sacado el llamado "gasto preventivo", utilizado en los dos estudios anteriores de Libertad y Desarrollo, que si bien es recogido en algunos análisis internacionales, nos parece que requiere ser desarrollado con mucha más profundidad en Chile, antes de ser incorporado a una estimación como esta, especialmente dado que al incluirlo, la participación del sector privado en prevención y disuasión es modificada de manera significativa. En materia de gasto público, se excluyó DIPRECA, sistema previsional de Carabineros y que es un componente fundamental del sistema de beneficios que entrega la institución a sus integrantes, el que se consideraba tanto en los estudios de Paz Ciudadana como de Libertad y Desarrollo. Sin embargo, en esta área hemos estimado que se requiere definir con mayor precisión la parte que debe ser imputada como gasto público.

⁴ Se agregó el presupuesto del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA).

algunos costos se traducen en que existe un número importante de ellos que no se han incluido en el trabajo⁵. Dado lo anterior, los resultados obtenidos deben ser considerados como conservadores y sub-estimados.

2. Composición del Costo de la Delincuencia

2.1 Sector público 2000-2012

2.1.1 *Prevención y disuasión*

Son diversos los organismos públicos que intervienen en la prevención del delito, tanto desde la perspectiva de los factores de riesgo involucrados como de potenciar el componente disuasivo. Es así como el rol en este ámbito que realiza Carabineros de Chile y la Subsecretaría de Prevención del Delito, son fundamentales. También juegan un rol la Agencia Nacional de Inteligencia y el Ministerio de Desarrollo Social.

⁵ Por ejemplo, desde el punto de vista de las víctimas: los costos alternativos de dejar de ir a un determinado lugar o salir a ciertas horas producto del temor; los relativos al valor de los objetos robados; costos emocionales y físicos derivados del episodio delictual; costos de otros bienes afectados; costos médicos y de recuperación, producto de lesiones, etc. Desde el punto de vista del delincuente: las menores posibilidades de trabajo al quedar en libertad; el costo de los insumos que utiliza para cometer el delito; los costos de evitar el arresto, el de sus abogados, los costos psicológicos, etc. Finalmente, para la sociedad en general está, por ejemplo, la desvalorización de ciertos barrios por el incremento en los índices delictuales, y el incremento en la sensación de vulnerabilidad de la población, entre otros.

Cuadro N° 1
Gasto público en prevención y disuasión (millones de \$ 2012)

	2000	2005	2010	2011	2012
Carabineros (1)	297.423	387.230	618.335	729.987	773.761
Subsecretaría de Carabineros*	-	870	1.169	1.145	-
Agencia Nacional de Inteligencia	2.856	4.226	4.749	4.749	4.862
Subsecretaría de Prevención del Delito (ex Programa de Seguridad y Participación Ciudadana) (2)	-	14.290	23.306	25.694	30.081
SENDA	-	15.023	33.561	34.374	37.075
Programas de Apoyo MIDEPLAN (3)	-	-	10.458	10.528	11.332
Total	300.279	421.639	691.578	806.447	857.111

Fuente: Leyes de Presupuesto años respectivos.

(1) No considera Hospital de Carabineros.

(2) Incluye Programa Escuelas Preventivas de Fútbol Ministerio del Interior.

(3) Corresponde al Programa de Apoyo de los Hijos de Personas Privadas de Libertad y al Programa Chile Acoge: Violencia Intrafamiliar.

(*) A partir del 2011 la Subsecretaría de Carabineros dejó de existir.

El incremento de los recursos que el sector público ha destinado entre 2000 y 2012 llega al 188,1%, alcanzando en 2012 la cifra de \$ 1.848.948 millones (US\$ 3.801 millones). Dicho incremento está asociado a importantes aumentos del presupuesto de Carabineros de Chile, que en 2012 llegó a los \$ 773 mil millones (US\$ 1.590 millones). Algunas razones que explican este aumento están vinculadas a la ampliación del Plan Cuadrante, como asimismo, a aumentos importantes de dotación en personal, comprometido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) 2006-2010 de la ex Presidenta Bachelet, y continuados por el actual Gobierno. Destaca asimismo la Subsecretaría de Prevención del Delito (ex Programa de Seguridad y Participación Ciudadana⁶), cuyo presupuesto para 2012 alcanzó los \$ 30.081 millones (US\$ 62 millones), aumentando más de un 110,5% respecto de 2005.

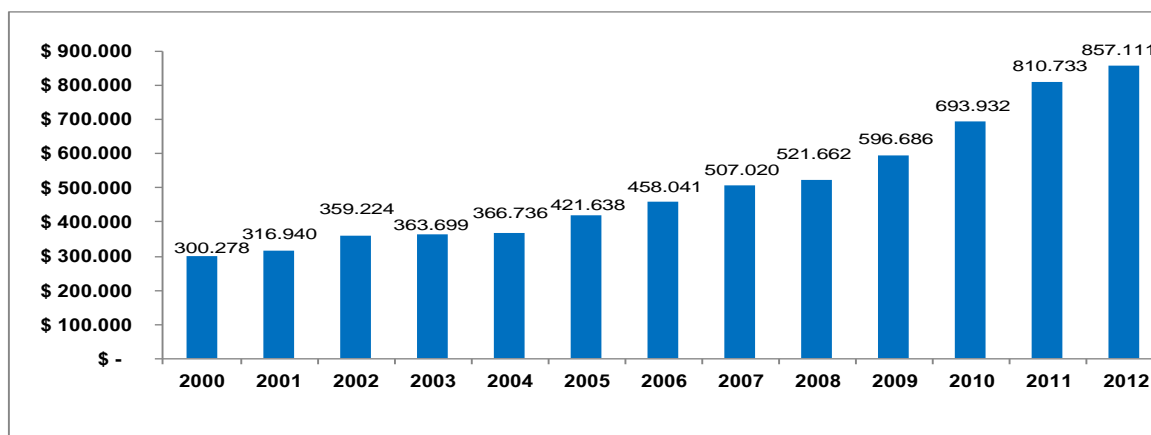
Finalmente podemos destacar los programas de apoyo del Ministerio de Desarrollo Social (ex MIDEPLAN), que consideramos por primera vez en el informe de 2011, y que tienen por objeto apoyar a los hijos de personas con condenas privativas de libertad, como asimismo el programa Chile Acoge en aspectos de violencia

⁶ En este se encontraba la División de Seguridad Pública (DSP), que fue por años la encargada en el Ministerio del Interior de elaborar las políticas, acciones y medidas de seguridad, previamente a que se transformara en la Subsecretaría de Prevención del Delito.

intrafamiliar. El presupuesto para estos programas en 2012 llegó a \$ 11.332 millones (US\$ 23 millones), aumentando en un 482,32% desde el 2006.

El Gráfico N° 1 muestra la evolución del gasto público en prevención y disuasión entre 2000 y 2012.

Gráfico N° 1
Evolución gasto público en prevención y disuasión 2000-2012
(Millones de \$ 2012)



2.1.2 Investigación de los delitos e identificación de los culpables:

Denunciados los delitos, existe una serie de instituciones públicas que tienen por objeto investigar los mismos e identificar a los culpables; destacan la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y el Ministerio Público. Asimismo, cumplen un rol la Defensoría Penal Pública, encargada de otorgar defensa judicial a los imputados de delitos, y el Servicio Médico Legal a cargo de diversas pericias.

En 2012, el gasto público destinado a esta área alcanza los \$ 620.567 millones (US\$ 1.276 millones), lo que implica un aumento real de 244,9% desde el año 2000 o de 69,5% solo desde el 2005, como se desprende del Cuadro N° 2.

Cuadro N° 2
Gasto público en investigación de delitos e identificación de culpables
(Millones de \$ 2012)

	2000	2005	2009	2010	2011	2012
Policía de Investigaciones	82.137	101.838	150.957	169.899	183.061	192.604
Servicio Médico Legal (1)	1.048	1.379	2.216	2.327	2.705	2.691
Justicia Criminal (2)	61.198	62.944	76.908	87.149	88.907	89.304
Ministerio Público	-	86.670	104.690	109.149	116.104	116.733
Defensoría Penal Pública	-	30.347	39.441	42.485	42.456	41.898
Secretaría y Administración Gral. Ministerio Justicia(3)	26.281	38.355	148.882	153.581	154.327	176.066
Programa de Coordinación Reforma Judicial (4)	9.096	44.449	1.396	1.379	1.415	1.272
Total	179.760	366.434	524.971	566.483	589.496	620.567

Fuente: Leyes de Presupuesto años respectivos.

(1) Se descontó el porcentaje de peritajes y exámenes relacionados con delincuencia para cada año.

(2) Se calculó el % destinado del presupuesto a justicia criminal según Memorias del Poder Judicial.

(3) Incluye 50% Presupuesto CAJ hasta 2002, 25% hasta el 2005 y desde el 2006 en adelante 0% CAJ. A partir de 2010 se incluyen transferencias por concesiones carcelarias.

(4) Hasta 2005 se destina el Presupuesto total; a partir de 2006 se destina 20% y a partir del 2008 se destina 5%.

Si analizamos los presupuestos más relevantes de esta área y sus incrementos, es posible observar, en primer lugar, el presupuesto de la Policía de Investigaciones (PDI), que en 2012 llega a \$ 192.604 millones (US\$ 393 millones), aumentando, respecto del año 2000 en un 134,49% y solo desde 2005 en un 89,12%.

El presupuesto del Ministerio Público, por otro lado, llega en 2012 a \$ 116.733 millones (US\$ 240 millones).

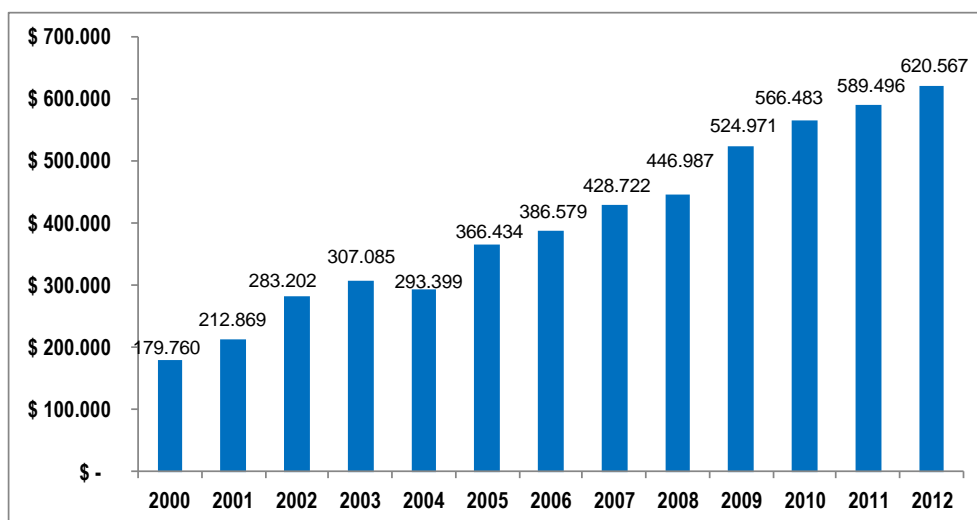
Sigue en importancia la estimación respecto de la justicia criminal, esto es, la parte del presupuesto que el Poder Judicial destina en materia penal, sobre la base de la información entregada en sus memorias anuales. Así, en el año 2012 este supera los \$ 89.304 millones (US\$ 183 millones), creciendo un 228,7% respecto del año 2000⁷.

Finalmente, destaca el presupuesto de la Defensoría Penal Pública, el que en 2012 alcanzó los \$ 41.898 millones (US\$ 86 millones).

⁷ Se debe considerar que mientras en 2000, los ingresos de causas penales (sistema antiguo) representaban aproximadamente el 45% del total de ingresos al sistema judicial, en 2010 (sistema nuevo) llegaron a 19,2%, a lo que se debe sumar un remanente del 0,1% del sistema antiguo. Ver Memoria Anual del Poder Judicial 2010.

En el Gráfico N° 2 se puede observar la evolución del gasto público en investigación de delitos e identificación de los culpables entre 2000 y 2012.

Gráfico N° 2
Evolución gasto público en investigación de delitos e identificación de culpables 2000-2012 (millones de \$ 2012)



2.1.3 Aplicación de sanciones, rehabilitación y reinserción

Una vez que se ha determinado judicialmente la responsabilidad penal de un individuo, se aplica una sanción, la que tiene tanto un efecto de reproche social como uno disuasivo. En este ámbito las instituciones relevantes son Gendarmería de Chile (GENCHI) y el Servicio Nacional de Menores (SENAME), para el caso de los menores infractores de la ley. Ambas instituciones, además, están encargadas de implementar planes de rehabilitación y reinserción social.

En 2012 el gasto público en esta área llegó prácticamente a los \$ 371 mil millones (US\$ 763 millones), duplicándose respecto de 2000.

El Cuadro N° 3 muestra las principales cifras en esta materia.

Cuadro N° 3

Gasto público en aplicación de sanciones, rehabilitación y reinserción (Millones de \$ 2012)

	2000	2005	2009	2010	2011	2012
Gendarmería de Chile	102.420	146.035	192.005	205.131	243.949	258.995
Programa de Rehabilitación y Reinserción Social	-	-	5.107	6.127	7.705	9.355
Servicio Nacional de Menores	59.297	65.658	125.402	96.436	97.080	102.921
Total	161.717	211.693	322.514	307.694	348.734	371.271

Fuente: Leyes de Presupuesto años respectivos.

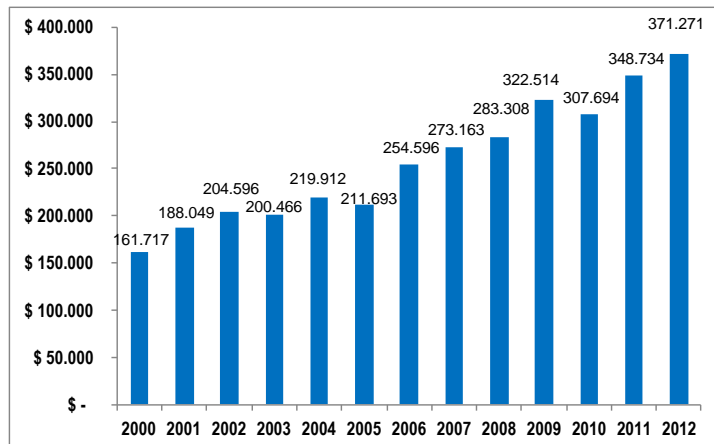
1) Este ítem es un desglose dentro del presupuesto de Gendarmería.

En 2012 el presupuesto de Gendarmería de Chile, llegó a los \$ 258.995 millones (US\$ 532 millones), incrementándose un 152,87% respecto del año 2000 y aumentando, respecto de 2005 en un 77,35%. Ahora bien, si solo analizamos el Programa de Rehabilitación y Reinserción Social de Gendarmería, podemos observar que en 2012 este llegó a los \$ 9.355 millones (US\$ 19,09 millones).

El presupuesto de SENAME, llega en 2012 a los \$ 102.921 millones, aumentando en un 73,56% respecto del año 2000, y en un 56,75% respecto del 2005. En el Gráfico N° 3 se puede observar la evolución del gasto público en aplicación de sanciones, rehabilitación y reinserción entre 2000 y 2012.

Gráfico N° 3

Evolución del gasto público en aplicación de sanciones, Rehabilitación y Reinserción 2000-2012 (millones de \$ 2012)



2.1.4 Gasto público total

De la suma de los tres componentes antes analizado observamos, siguiendo el Cuadro N° 4, que el gasto público total en delincuencia alcanza a \$ 1.848.948 millones para el año 2012 (US\$ 3.801 millones), apreciándose un incremento de 188,1% respecto del año 2000 y de un 84,96% respecto a 2005. Los US\$ 3.801 millones pueden desglosarse, a su vez, respecto del año 2012, sobre la base de US\$ 1.762 en gasto público destinado a prevención y disuasión; US\$ 1.276 en investigación de delitos e identificación de los culpables; y US\$ 763 en materia de aplicación de sanciones, rehabilitación y reinserción.

Lo anterior también puede verse en el Cuadro N° 4 y en el Gráfico N° 4.

Gráfico N° 4
Evolución del gasto público total 2000-2012
(Millones de \$ 2012)

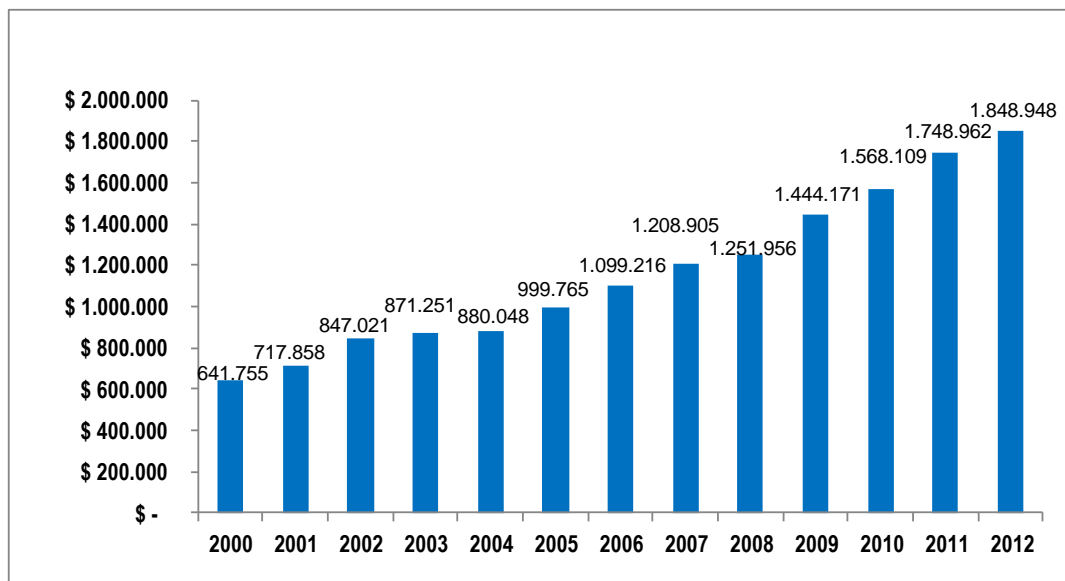
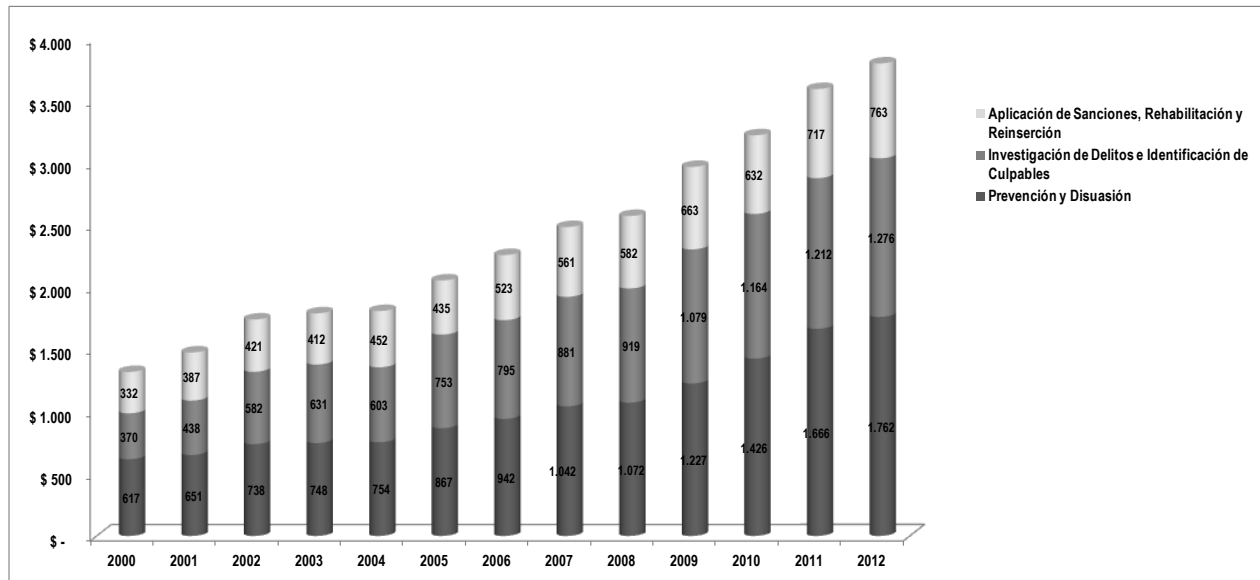


Gráfico N° 5
Gasto del público total
(Millones de US\$ 2012)



Por otra parte, desde la perspectiva de la composición del gasto público total según instituciones se observa cómo el presupuesto de Carabineros constituyó el más alto, llegando, en 2012, a representar el 41,85% del total. Le siguen en importancia relativa Gendarmería de Chile (14%), Policía de Investigaciones (10,4%), y la Secretaría y Administración Gral de Justicia (9,5%), como se desprende del Cuadro N° 4 y del Gráfico N° 6.

Cuadro N° 4

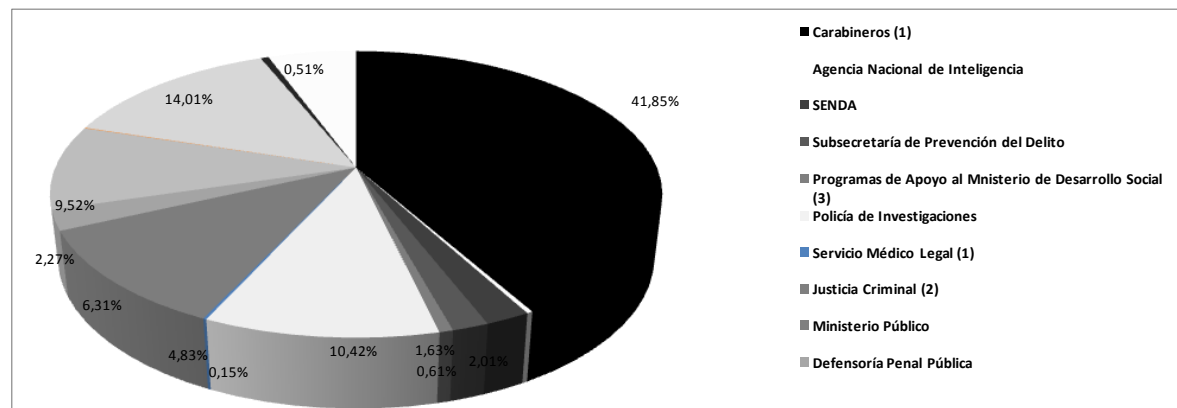
Composición gasto público según institución como % del gasto total (Millones de \$ 2012)

Desagregación del Gasto Público por institución

	En MM de US\$		% del Gasto Total
	En MM \$ 2012	2012	
Gasto Público en Prevención y Disuasión			
Carabineros (1)	\$ 773.761	\$ 1.590	41,8%
Subsecretaría de Carabineros	\$ -	\$ -	0,0%
Agencia Nacional de Inteligencia	\$ 4.862	\$ 10	0,3%
Subsecretaría de Prevención del Delito (2)	\$ 30.081	\$ 62	1,6%
Programas de Apoyo Ministerio de Desarrollo Social (3)	\$ 11.332	\$ 23	0,6%
SENDA (4)	\$ 37.075	\$ 76	2,0%
Gasto Público en Investigación de Delitos e Identificación de Culpables			
Policía de Investigaciones	\$ 192.604	\$ 396	10,4%
Servicio Médico Legal (1)	\$ 2.691	\$ 6	0,1%
Justicia Criminal (2)	\$ 89.304	\$ 184	4,8%
Ministerio Público	\$ 116.733	\$ 240	6,3%
Defensoría Penal Pública	\$ 41.898	\$ 86	2,3%
Secretaría y Administración Gral. Ministerio Justicia(3)	\$ 176.066	\$ 362	9,5%
Programa de Coordinación Reforma Judicial (4)	\$ 1.272	\$ 3	0,1%
Gasto Público en Aplicación de Sanciones, Rehabilitación y Reinserción			
Gendarmería	\$ 258.995	\$ 532	14,0%
Programa de Rehabilitación y Reinserción Social	\$ 9.355	\$ 19	0,5%
Servicio Nacional de Menores	\$ 102.921	\$ 212	5,6%
TOTAL	\$ 1.848.948	\$ 3.801	100,0%

Gráfico N° 6

Composición del gasto público 2012 según institución como % del gasto total (Millones de \$ 2012)



2.2 Sector privado 2000-2012

Junto con la labor estatal en materia de seguridad, el sector privado ha venido realizando un gigantesco aporte. El valor que cada persona le asigna a disminuir la probabilidad de ser víctima de la delincuencia depende principalmente de su magnitud, del grado de aversión al riesgo del individuo y de su nivel de riqueza. Estos costos se vinculan principalmente con prevención y disuasión, en bienes como servicios de seguridad: vigilancia (guardias), alarmas, seguros, entre otros.

Por otro lado, existe una serie de costos que también tienen impacto en el sector privado (afectando a la sociedad, víctimas y delincuentes), y que dicen relación con el costo de oportunidad de los reclusos, el costo de la vida, servicios profesionales y costo de denunciar.

2.2.1. *Prevención y disuasión*

Durante el año 2012, el gasto privado en prevención y disuasión llegó a \$ 906.293 millones (US\$ 1.863 millones) Así, entre 2000 y 2012, el aumento del gasto privado en prevención y disuasión llega al 165,3%.

El componente más relevante de este gasto está dado por los servicios de vigilancia que explican el 71,2% del gasto privado en prevención y disuasión, y que en 2012 llegaron a los \$ 644.925 millones (US\$ 1.325 millones).

Por otro lado, en 2012 los costos asociados al monitoreo de alarma llegó a \$ 71.558 millones (más de US\$ 181 millones), aumentando un 79,19% respecto del año 2000.

Finalmente en esta materia, también transporte de valores es otro rubro que ha crecido bastante en el periodo, alcanzando el año 2012 un monto de US\$ 201 millones.

Cuadro N° 5
Seguridad privada
(Millones de \$ 2012)

	2000	2005	2009	2010	2011*	2012*
Servicios de vigilancia	253.117	342.551	552.427	562.117	583.586	644.925
Otros servicios de vigilancia (2)	18.452	35.209	45.902	51.061	57.017	64.605
Monitoreo alarmas	39.932	76.282	82.505	76.035	71.495	71.558
Transporte valores	18.185	69.086	106.791	100.301	96.118	98.046
Tecnologías de seguridad	9.518	20.150	23.692	22.761	22.311	23.279
Investigadores privados	84	360	1.213	1.185	1.181	1.253
Asesoría/ Defensoría Privada	2.348	2.965	2.776	2.622	2.526	2.591
Capacitación	0	4	17	16	16	17
Escolta y protección VIP	7	13	18	18	19	20

2.2.2 Otros costos privados

Además de los mencionados, existen otros costos privados que afectan a la sociedad –tanto a las víctimas como a los delincuentes–, algunos susceptibles de ser cuantificados y otros que no lo son.

a) Costos estimados

En 2012 estos costos alcanzaron los \$ 152.831 millones (US\$ 314 millones), aumentando un 78,3% respecto de 2000.

A continuación se analizarán cada uno de ellos.

i) Costo de oportunidad de los reclusos

Este costo busca estimar cuánto deja de percibir el grupo de individuos que están privados de libertad, y por ende la sociedad, por estar en la cárcel. En 2012, este llega a los \$ 112.692 millones (US\$ 232 millones), aumentando en

un 94,47% respecto del año 2000. Estos incrementos están fuertemente asociados con el aumento de la población penal.

ii) Pérdida de vidas o costo de la vida

Este costo busca calcular el costo por la pérdida de vidas humanas producto de la delincuencia, tanto respecto de las víctimas, como de delincuentes y personal de Carabineros o de Investigaciones que hubiesen muerto como resultado de algún delito⁸. En 2012 este costo alcanzó los \$ 34.117 millones (US\$ 70 millones), aumentando en 33,92% respecto del año 2000.

iii) Servicios profesionales

Con este ítem buscamos estimar el costo de oportunidad de aquellos postulantes que estaban dedicados al área penal (egresados de derecho que para obtener su título de abogado deben hacer una práctica profesional de 6 meses gratuita para el Estado). Al igual como se estimó para la Corporación de Asistencia Judicial en esta materia, con la reforma procesal la práctica de los egresados en el área penal comienza a extinguirse en 2006 y 2007, por lo que solo se registra lo ocurrido en años anteriores, y el monto es bastante bajo en comparación a otros ítemes.

iv) Costo de denunciar

Una vez cometido el delito, la víctima debe realizar la denuncia respectiva. Esto genera un costo para las víctimas cuya magnitud depende de varios factores, como por ejemplo, el tiempo que se requiere para llevar a cabo los trámites y el riesgo de que el delincuente busque alguna forma de venganza, entre otros. El componente susceptible de estimación en este caso es el costo alternativo.

En 2012, este llegó a los \$ 6.022 millones (US\$ 12 millones), experimentando un aumento respecto del año 2000 de 177,89%, lo que se explica fundamentalmente por el incremento en las denuncias durante el periodo.

⁸ Desde una perspectiva metodológica, una forma de aproximarse al valor que puede tener una vida humana, consiste en analizar el aporte que la persona hace a la sociedad en cuanto a su producción. Este aporte se mide a través del sueldo que percibe la persona, debido a que esto constituye un pago equivalente a su aporte productivo. En este enfoque, el valor de una vida consistiría en el valor de los sueldos futuros que percibiría la persona hasta su muerte. Para valorizar las horas no trabajadas, que se destinan al consumo de bienes y servicios, y la realización de actividades que reportan utilidad personal, suponemos que las personas las valoran en el mismo monto que corresponde a su salario por hora, ya que si no fuese así cambiaría el número de horas trabajadas y no trabajadas y se obtendría un mayor nivel de bienestar.

b) Costos no estimados

Como se señaló recientemente existe una serie de costos privados, que afectan, tanto a las víctimas como a los delincuentes, que han sido conceptualizados y pudieran ser cuantificados en el futuro.

- i) Desde el punto de vista de las víctimas:
 - los costos alternativos de dejar de ir a un determinado lugar o salir a ciertas horas producto del temor;
 - los relativos al valor de los objetos robados;
 - costos emocionales y físicos producto del episodio delictual;
 - costo de otros bienes afectados;
 - costos médicos y de recuperación producto de lesiones, etc.
- ii) Desde el punto de vista del delincuente:
 - las menores posibilidades de trabajo al quedar en libertad;
 - el costo de los insumos que utiliza para cometer el delito;
 - los costos de evitar el arresto;
 - los costos de contratar abogados;
 - los costos psicológicos, etc.

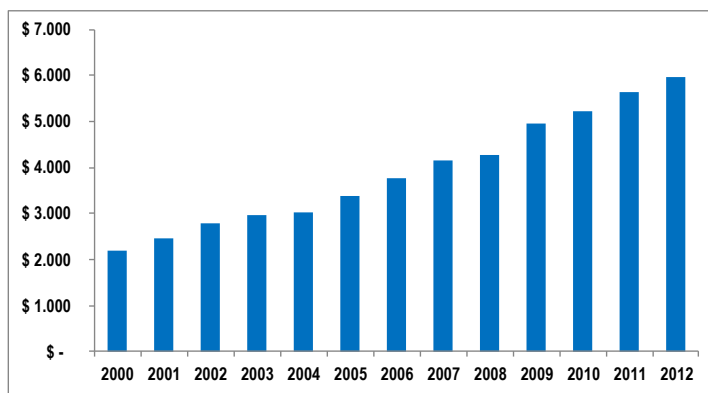
2.3 Costo total de la delincuencia 2000-2012

Tras haber cuantificado los costos de la delincuencia tanto públicos como privados para el periodo 2000-2012, cabe entonces establecer el costo total de la delincuencia agregado para el mismo. Ello nos permitirá tener una visión de conjunto respecto de su magnitud, como también de su evolución.

2.3.1. Costo total de la delincuencia

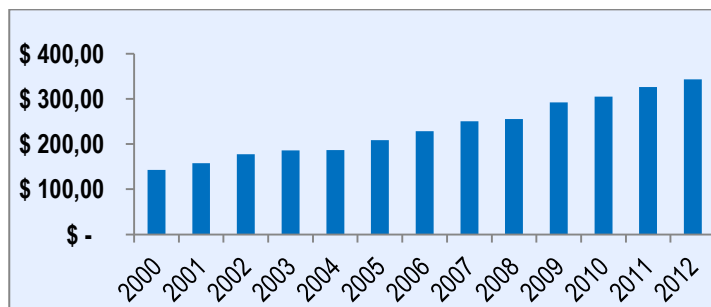
El costo total de la delincuencia en 2012 llegó a \$ 2.908.072 millones (US\$ 5.978 millones), lo que equivale a 2,23% del PIB de 2012. Ello implica que respecto del año 2000 el aumento es de 171,97%, como puede observarse en el Gráfico N° 7.

Gráfico N° 7
Costo total de la delincuencia 2000-2012
(Millones de US\$ 2012)



El aumento de 172% registrado desde el año 2000 debe ser considerado como muy significativo en la medida en que para el mismo periodo, nuestra economía solo creció aproximadamente un 120,2% para el mismo periodo. Si se analiza, por otro lado, el gasto total en delincuencia per cápita se observa que pasa desde los US\$ 142 en 2000 a US\$ 343 en 2012. Ver Gráfico N° 8.

Gráfico N° 8
Evolución del gasto per cápita promedio 2000-2012
(Millones de dólares \$ 2012)



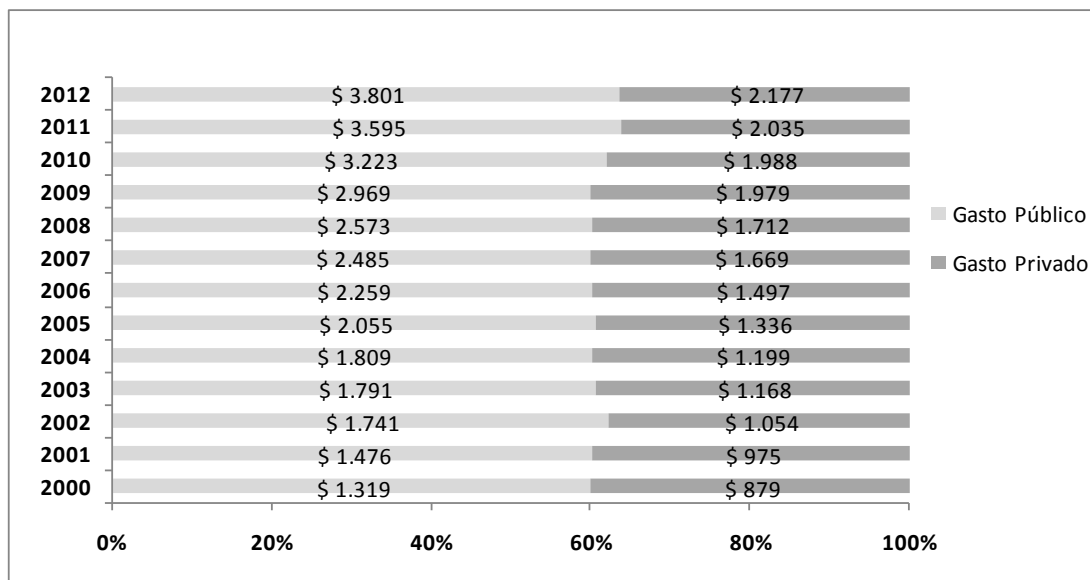
2.3.2 Descomposición y cambios en participación relativa: costos públicos y privados

En primer lugar, si descomponemos el costo total entre los sectores público y privado se puede observar que el público pasó desde los US\$ 1.319 millones el año 2000 a US\$ 3.801 millones en 2012, lo que representa un aumento de más del 188,17%. Ello también significa que en 2012 se gastaron US\$ 2.482 millones más que en el año 2000. Por otra parte, el gasto privado en delincuencia pasó de US\$ 879 millones en 2000 a US\$ 2177 millones el año 2012, lo que representa un aumento de aproximadamente un 147,6%

Si se analiza la participación relativa del sector público y privado en el costo total de la delincuencia, es posible observar que esta varía poco en el tiempo. Si observamos el año 2000 vemos que la participación relativa del gasto público respecto al gasto total es de 60%, versus un 63,6% durante el año 2012.

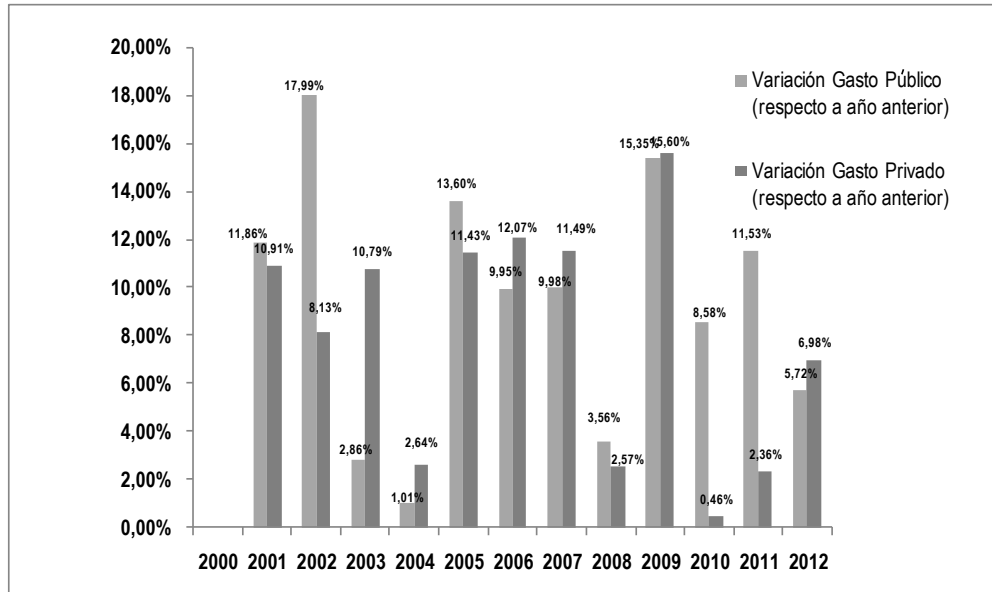
Todo lo anterior se observa en el Gráfico N° 9.

Gráfico N° 9
Composición en porcentaje del costo total delincuencia 2000-2012



Por otro lado, en el Gráfico N° 10, si bien se observan variaciones significativas entre periodos, se puede apreciar, en todo caso, que las variaciones de un año a otro, tanto en costo público como privado, nunca superan el 20%.

Gráfico N° 10
Variación de la composición del costo total respecto al año anterior
(Millones de \$ 2012)



3. El desafío de la eficiencia: programas basados en evidencia y evaluación

¿Cuál es el impacto en disminución de la delincuencia que logra el esfuerzo antes cuantificado en términos de recursos gastados por el sector público y privado para hacer frente a este problema? En otras palabras, ¿cuán eficientes estamos siendo en el uso de estos recursos? Como se mostrará a continuación, la respuesta es mixta: si bien, bajo la medición de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) las disminuciones de victimización han sido relevantes, una comparación internacional nos muestra todavía en una situación deficitaria en diversos delitos, principalmente aquellos contra la propiedad. A lo anterior se suma una serie de desafíos en materia de mejoras en gestión y rendición de cuentas de los órganos del sistema penal, pero en particular –déficit transversal a las políticas públicas en Chile–, a la falta de una cultura de iniciativas basadas en la evidencia y en donde las evaluaciones de impacto de las mismas resultan clave antes de ampliar coberturas.

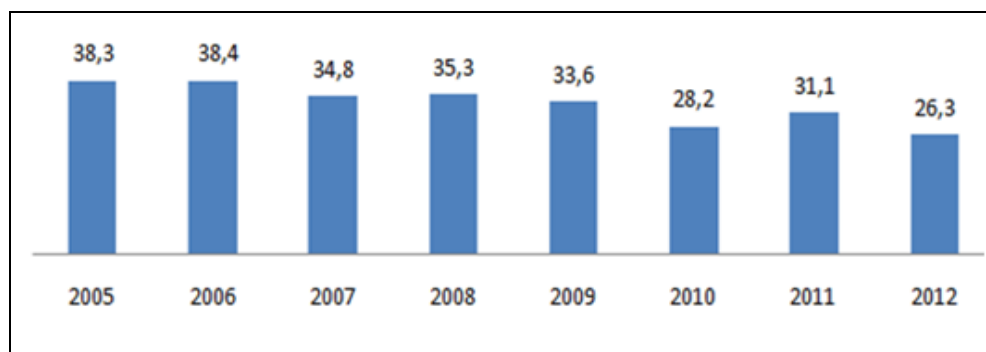
3.1 Victimización y flujo penal

3.1.1 Evolución ENUSC

Actualmente existe bastante consenso en que las encuestas de victimización son un instrumento más confiable que las estadísticas de denuncias (generalmente a instituciones policiales) a la hora de medir el nivel global de delincuencia de un país⁹. En este sentido, la ENUSC es el mejor instrumento que existe en Chile.

Las cifras indican que la victimización general durante 2012 pasado alcanzó un 26,3%, el nivel más bajo de la serie desde que se empezara a comparar en 2005 (38,3%)¹⁰, lo que constituye una reducción de casi 5 puntos porcentuales respecto al mismo indicador de 2011, en que la victimización se disparó hasta 31,1%, y 12 puntos porcentuales desde el 38,3% de 2005 y 38,4% de 2006, como se desprende del Gráfico N° 11.

Gráfico N° 11
Porcentaje de hogares victimizados ENUSC 2005-2012



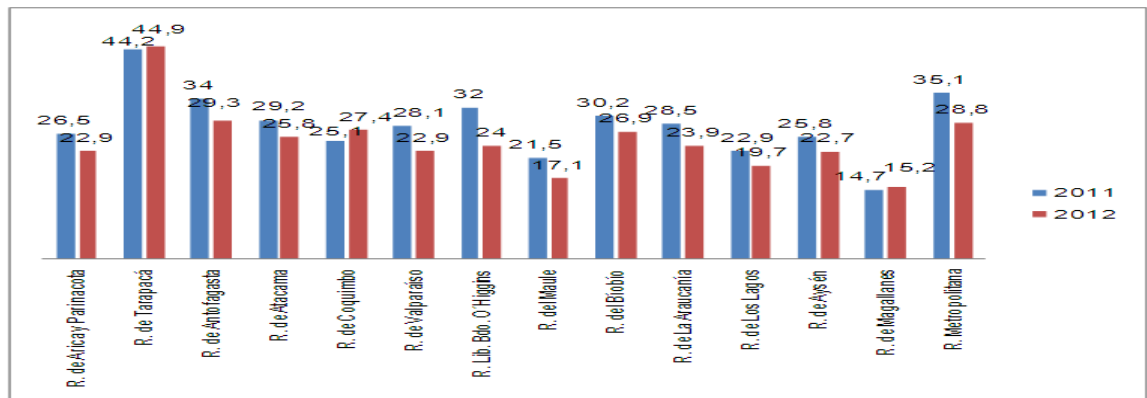
Fuente: Elaboración propia con datos de ENUSC 2012, INE.

⁹ La literatura comparada tiende a mostrar que ambos sistemas deben ser más bien vistos como complementarios y que tienen sus particularidades, fuerzas y debilidades como mecanismos estadísticos frente a tipos de delitos específicos. En este sentido, existen límites entre la consistencia que pueden y deberían tener las estadísticas policiales (denuncias) y las encuestas de victimización. Para Lynch, y en el contexto de comparaciones internacionales de niveles de crimen, ambas fuentes son consistentes donde deben serlo y las anomalías entre ambas son comprensibles. Además, cubren dos diferentes componentes del problema criminal: las estadísticas policiales debe ser utilizadas para comparar aquellas clases de delitos que son conocidamente denunciadas en una proporción alta. Estas incluyen homicidios, robo de vehículos (*motor vehicle theft*) y robos con fuerza a la vivienda (*burglary*). Las encuestas de victimización deben ser utilizadas para aquellos delitos en los cuales la denuncia a las policías es baja: hurtos o robos no violentos. Las denuncias policiales deben ser utilizadas para casos especiales, de rara ocurrencia, como homicidios o violaciones, que no son cubiertos con la misma precisión por las encuestas de victimización o que no son afectados por errores muestrales serios. Ver Lynch (2007) pp. 13-17.

¹⁰ En realidad se toma desde 2003, cuando la victimización general superó levemente el 42%; sin embargo, el hecho que no se hiciera la ENUSC en 2004, produjo que el INE solo considere la comparación desde 2005.

A lo anterior se suman otros indicadores positivos como la disminución de la victimización en prácticamente todas las regiones, destacando la Región Metropolitana (desde el 35,1% de 2011 al 28,8% en 2012), y O'Higgins (desde el 32% de 2011 al 24% de 2012). También son estadísticamente significativas las disminuciones de la victimización respecto de 2011 en Valparaíso (28,1% a 22,9%), Maule (21,5% a 17,1%), Biobío (30,2% a 26,9%), y La Araucanía (28,5% a 23,9%). Las únicas dos regiones que enfrentan leves aumentos –no estadísticamente significativos–, son Coquimbo (de 25,1% a 27,4%) y Magallanes (de 14,7% a 15,2%), tal como se desprende del Gráfico N° 12.

Gráfico N° 12
Evolución ENUSC Regiones 2005, 2011 y 2012



Fuente: Elaboración propia con datos de ENUSC 2012, INE.

Por otro lado, respecto de 2011 se observa una reducción estadísticamente significativa en todos los tipos de delitos: hurto (9,1% a 8,1%), robo por sorpresa (6,2% a 4,6%), robo con fuerza en la vivienda (5,7% a 4,4%), robo con violencia e intimidación (5,3% a 4,3%), delitos económicos (2,5% a 1,6%), lesiones (2,5% a 1,6%) y delitos de soborno o corrupción (0,4% a 0,3%).

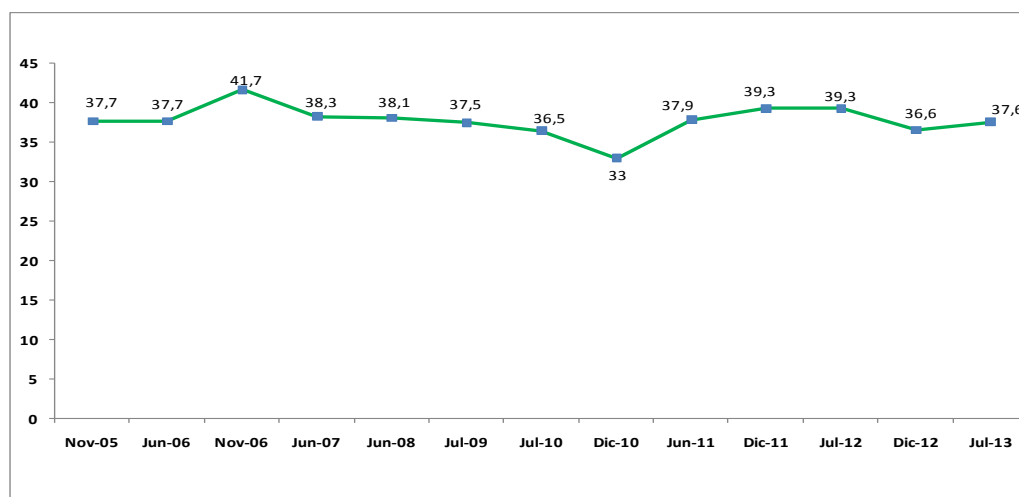
Otros resultados interesantes son el que la revictimización también alcanza su menor nivel, cayendo desde un 35,1% a un 28,7%; el que entre el 2011 y 2012 disminuyan en 12,4 puntos porcentuales las personas que creen que la delincuencia está aumentando en el país, y por contrapartida, aumenta la proporción de quienes se sienten seguros o muy seguros al transitar a solas por el barrio cuando oscurece.

3.1.2 Evolución victimización robos Paz Ciudadana

Por otro lado, si se analiza el último índice Paz Ciudadana-Adimark¹¹, podemos observar que el principal indicador se mantiene estable. En efecto, desde la perspectiva de los hogares en que algún miembro de la familia ha sido víctima de robo o intento de robo en los últimos 6 meses, pasa desde el 36,6% de diciembre de 2012 a 37,6%, no siendo un aumento estadísticamente significativo. Por otra parte, si se compara respecto de julio de 2013, sí se produce una reducción (desde el 39,3%). Lo curioso es que, al menos, no se hayan presentado ambos indicadores –especialmente cuando existen debates en torno a la posible estacionalidad del fenómeno delictivo–. (Ver Gráfico N° 13).

Gráfico N° 13

Evolución victimización noviembre 2005-Julio 2013. Encuesta Paz Ciudadana



Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuesta Paz Ciudadana, julio 2013.

Asimismo, sí se encuentra un aumento estadísticamente significativo en Santiago, donde la victimización pasa del 37,7% de diciembre de 2012 al 39,8% del primer semestre de 2013. Igualmente preocupante es el aumento de la victimización según

¹¹ Junto con la Encuesta de Victimización del Gobierno (ENUSC) es uno de los indicadores más relevantes en esta materia y cuenta con una serie que se extiende por más de una década. Con todo, se trata de un instrumento que busca analizar la situación específica de los robos –diferencia muy relevante con la ENUSC que analiza una variedad amplia de delitos–. Esta precisión es relevante, dado que se tiende a confundir el sentido más limitado que tiene la Encuesta de Paz Ciudadana, y los resultados que arroja, con el más amplio de la ENUSC –y que la convierte en el instrumento más sofisticado en esta materia–, generándose confusión en la opinión pública cuando la información no es contextualizada. Ello también sucede cuando se presentan las estadísticas de denuncias de delitos del Ministerio del Interior y del Ministerio Público –instrumentos menos sofisticados que la ENUSC como hemos señalado anteriormente–.

nivel socioeconómico donde en el más bajo pasa desde el 32,8% de julio de 2012 al 37,3% del primer semestre de 2013.

También destaca el que el 26,1% de los hogares en Chile concentre el 89,8% de los robos e intentos de robos, y el que la revictimización de más de 3 veces pase del 9,5% al 10,2% entre diciembre de 2012 y julio de 2013. Respecto del nivel de violencia en los barrios, preocupa el aumento de la percepción media (de 36,9% en diciembre de 2012 a 45,9% en julio de 2013) y alta (26,6% de diciembre 2012 al 28,8% de julio de 2013).

3.1.3 Flujo del sistema penal: ingresos y términos

Ahora bien, si pasamos desde la evidencia que nos muestran las encuestas de victimización, a la evidencia en materia de ingresos y términos del sistema penal, encontraremos resultados relevantes. En este sentido, la evidencia que presentamos hace algún tiempo es bastante indicativa del tipo de incentivos y desafíos institucionales que se perciben observando el flujo penal¹².

Si calculamos el número de delitos que se cometieron en Chile durante el año 2010, tomando como base los resultados de la encuesta de victimización del gobierno, ENUSC 2010, y los comparamos con el número de denuncias realizadas (mayoritariamente a Carabineros de Chile) y que ingresan al Ministerio Público para ser investigadas; el diferencial es abismante: casi 2,9 millones de delitos cometidos, ingresando al Ministerio Público poco más de 1,2 millones. El diferencial de ambas cifras llega al 43,7%, un indicador relevante a la hora de determinar la “cifra negra” (la no denuncia), y evaluar el grado de confiabilidad y eficacia que le asignan los chilenos a su sistema penal. Ver Cuadro N° 6.

¹² Libertad y Desarrollo (2011a).

Cuadro N° 6
Flujo del sistema penal 2010

DESAGREGACIÓN TOTAL DE DELITOS				
Total Delitos Año 2010 (1)	2.872.999			
Número de delitos que ingresaron al MP 2010	1.283.083			
N° de delitos que ingresaron al MP con Imputado Conocido	619.992			
N° de delitos que ingresaron al MP con Imputado Desconocido	663.421			
Número de términos aplicados durante el 2010 (2)	1.617.958	Tipo de Término Aplicado	Nr.de términos	% del Total de Términos
Término Aplicado a Imputado Conocido	924.962	Sentencia definitiva Condenatoria	246.648	15,2
		Suspensión condicional del procedimiento	200.738	12,4
		Archivo Provisional	162.671	10,1
		Otros	314.905	19,5
Término Aplicado a Imputado Desconocido	692.996	Sentencia definitiva condenatoria	0	0,0
		Suspensión condicional del procedimiento	0	0,0
		Archivo Provisional	546.968	33,8
		Otros	146.028	9,0

1) Cálculo en base a ENUSC 2010, estimación siguiendo metodología de Paz Ciudadana.

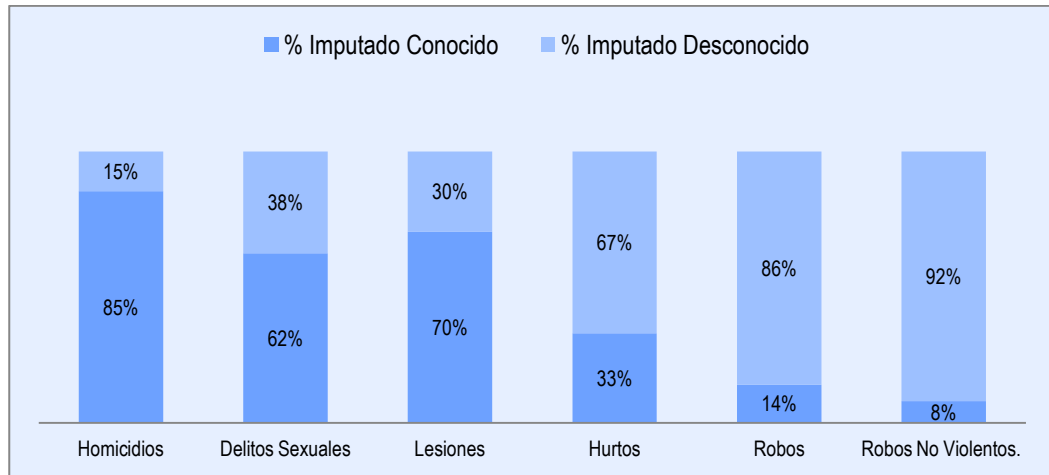
2) Se consideran términos aplicados durante el año, independiente de la fecha de recepción.

Fuente: Elaboración propia en base a ENUSC 2010 y Boletín Anual 2010; Ministerio Público de Chile.

El dato fundamental a la hora de evaluar los ingresos y la calidad de los términos que entrega el sistema penal, se vinculan a la existencia o no de un imputado conocido. Así, dado que el corazón de la reforma procesal penal consistió en racionalizar el proceso penal, fruto de la imposibilidad e inconveniencia de dar respuesta judicial a todos los delitos, y por tanto se establecen una serie de salidas para poner término anticipado a los procesos, los “términos facultativos” (e.g., archivo provisional o principio de oportunidad), que quedan en manos de los fiscales; el sistema penal se concentrará básicamente en aquellos casos que ingresan en que existen imputados conocidos. Según los datos de 2010, ingresan al Ministerio Público como imputados desconocidos porcentajes significativos en delitos contra la propiedad: hurtos (67%), robos (86%) y robos no violentos (92%). (Ver Gráfico N° 14).

Gráfico N° 14

Delitos ingresados por categoría y tipo de imputado 2010

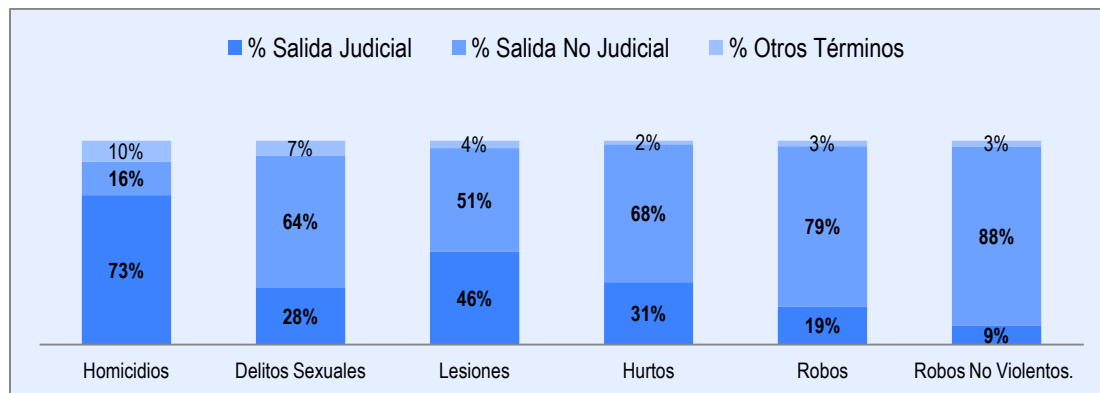


Si se analizan los términos aplicados durante 2010 desde una mirada global, solo un 15,2% se resolvió mediante sentencia definitiva condenatoria, y un 43,9% quedó como archivo provisional. El archivo provisional es una facultad del Ministerio Público, que le permite archivar transitoriamente los antecedentes denunciados, respecto de aquellas investigaciones en que aún no ha intervenido el Juez de Garantía, y que no aparecieran antecedentes que permitieran desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos¹³.

Ahora bien, las cifras llegan a ser preocupantes para delitos específicos. Si volvemos a nuestros ejemplos de delitos contra la propiedad, las salidas no judiciales (i.e., aplicación de términos facultativos por partes de los fiscales) son muy elevadas: hurto (68%); robos (79%) y robos no violentos (88%). Ver Gráfico N° 15. Para ser más claros: casi la totalidad de estos porcentajes corresponden a la aplicación de archivos provisionales: hurto (60%); robos (75%) y robos no violentos (86%).

¹³ Ver "Anuario Estadístico Interinstitucional Reforma Procesal Penal 2005", 2006, p. 266.

Gráfico N° 15
Términos aplicados por tipo de delitos 2010



Todo lo anterior explica que el modelo organizacional del Ministerio Público se centre en diferenciar los ingresos por complejidad de casos. Para ello, cerca del 80% de los ingresos pasan a las denominadas unidades TCMC (tramitación de casos menos complejos); básicamente delitos contra la propiedad en que hay imputados desconocidos para aplicarles un archivo provisional. Para el caso de delitos de mediana y alta complejidad es que, entonces, se dedican mayores recursos investigativos.

El desafío en esta materia consiste entonces en, por un lado, reconocer la necesidad de tener una persecución criminal eficiente –que requiere de los términos facultativos–; pero, por el otro, contar con instructivos generales del Fiscal Nacional y particulares de los Fiscales Regionales que entreguen reglas claras y públicas sobre los criterios de aplicación de los términos facultativos, y que ellos se expresen además en indicadores de gestión que permitan distinguir cuándo los archivos provisionales son solo una salida fácil, y cuándo se les aplica de manera racional. Ello también implica, niveles de rendición de cuentas mayores de los fiscales, como también de coordinación con las policías, en los términos establecidos en la Comisión de Expertos de Reforma a la Reforma Procesal Penal que hemos analizado en otras publicaciones¹⁴.

¹⁴ Libertad y Desarrollo (2011b).

3.2 Mirada comparada

Las comparaciones internacionales en materia de crimen no tan solo son complejas por las razones antes esgrimidas, sino que la elección de países a comparar debe ser realizada entre naciones muy similares, para poder obtener conclusiones de política pública. En este sentido, los países serán similares cuando su sistema de justicia criminal opere bajo un “ambiente” similar¹⁵.

El esfuerzo más relevante y sistemático en esta materia ha sido el ICVS (*International Crime Victims Survey*), que en su quinta versión (2005)¹⁶ presenta los resultados 2004-2005 de 30 países. Este se basa fundamentalmente en los resultados de comparaciones de encuestas de Victimización de la Unión Europea, a la que se agregan países como Japón (único de Asia) y los de América del Norte (Estados Unidos, Canadá y recientemente México). Chile y Sudamérica no están en esta comparación, y en la última versión del ICVS se incluyeron, como ciudades, Buenos Aires, Lima, Rio de Janeiro y Sao Paulo. Para obtener resultados para los países en desarrollo, y particularmente de Latinoamérica, se recurre a los trabajos de Alvazzi del Frate de UNICRI (Naciones Unidas), donde tampoco aparece Chile.

Desde la perspectiva nacional, la última comparación oficial que tenemos la encontramos en el Plan de Seguridad Pública del Gobierno de Chile 2010-2014, denominado “Chile Seguro”, donde se compara a Chile sobre la base de los resultados de la ENUSC 2005 con el estudio ICVS 2007 antes comentado. Dicha comparación muestra que en diversos tipos de robos considerados, estamos bastante lejos aún de los niveles de victimización de estos delitos en países desarrollados (Cuadro N° 8).

¹⁵ Estos ambientes están definidos, por una parte, por las instituciones de control social existentes (familia, comunidad, colegios y ambiente laboral), y en donde el sistema de justicia criminal entra a operar de manera coercitiva una vez que han fallado estas instituciones; y por otra parte, el segundo componente del “ambiente” está formado por las instituciones legales y políticas de dicha nación, siendo, por ejemplo, muy relevante el si estamos bajo un sistema de derecho civil (continental o de código) o común (*common law*). Lynch (2007) pp. 6-7.

¹⁶ Van Dijk y otros (2007).

Cuadro Nº 7
Comparación internacional victimización robos
ENUSC 2005-ICVS 2007

	Personas		Hogares	
	Robo	Robo	Robo	Robo
Países	no violento (*)	con violencia	a vivienda	de vehículo
Chile	9,3%	3,0%	7,8%	2,1%
Inglaterra/Gales	6,3%	1,4%	3,5%	1,8%
Irlanda	7,2%	2,2%	2,3%	1,2%
México	4,3%	3,0%	3,0%	0,9%
Nueva Zelanda	4,1%	1,1%	3,2%	1,8%
EE.UU.	4,8%	0,6%	2,5%	1,1%
Grecia	5,3%	1,4%	1,8%	0,3%
Suiza	5,9%	0,8%	1,6%	0,2%
Canadá	4,0%	0,8%	2,0%	0,8%
Países Bajos	3,7%	0,5%	1,3%	1,0%
Francia	3,3%	0,8%	1,6%	0,6%
Portugal	1,6%	1,0%	1,4%	1,5%
España	2,1%	1,3%	0,8%	1,0%
Alemania	3,0%	0,4%	0,9%	0,2%
Japón	0,3%	0,2%	0,9%	0,1%

Fuente: Chile Seguro 2010-2014.

(*) Comprende robos por sorpresa (lanzazos o carterazos) y hurto.

(**) Solo en Chile el robo de vehículos también incluye robo de motocicletas.

3.3 Evaluación

¿Qué explicaciones podemos encontrar en torno a la disminución de la victimización en los últimos años? Lamentablemente en Chile la evidencia es escasa y, en general, la existente ya es antigua y contradictoria¹⁷. Esfuerzos recientes han llegado a la ya vieja conclusión de que la criminalidad está determinada por

¹⁷ Ver, por ejemplo, Rivera, Núñez y Villavicencio (2004); Matus (2005); Cea, Ruiz y Matus (2007); y Gutiérrez, Núñez y Rivera (2008); también es interesante, aunque más específico, el trabajo de Vergara y Beyer (2006). Revisiones de literatura encontramos en Greene e Illanes (2005), y Cea, Ruiz y Matus (2006).

diversos factores socioeconómicos, demográficos, disuasorios y de políticas públicas¹⁸.

Desde una perspectiva comparada, el estado del arte no es muy diferente entre diferente tipo de casos. La literatura especializada no solo ha llegado a la misma conclusión en torno a la multicausalidad del fenómeno y su carácter cualitativo, sino que son múltiples los factores explicativos de disminución: variables económicas (como crecimiento o desempleo)¹⁹; variables sociales²⁰; infraestructura carcelaria y dotación policial²¹; reforma en la gestión policial²²; entre otras.

Probablemente, el mayor consenso que está emergiendo a nivel global dice relación con la generación de políticas y programas basados en evidencia, que está siendo un enfoque empleado por el programa Chile Seguro 2010-2014, y con coberturas adecuadas, que vayan teniendo, en el agregado, un efecto significativo.

Así, Chile hoy debe avanzar en la evaluación de sus programas y planes de seguridad pública en las diversas instituciones responsables de ellos. Aquí hay un rol fundamental para la DIPRES (Dirección de Presupuesto) del Ministerio de Hacienda, pero también para las instituciones autónomas como el Ministerio Público y el Poder Judicial las que, en una sociedad democrática, deben rendir cuentas ante la ciudadanía por su cometido y el uso eficientes de los recursos públicos.

¹⁸ Ver De la Fuente, Mejías y Castro (2011).

¹⁹ Ver Rosenfeld (2013), y Hagan y Peterson (1995).

²⁰ Ver Estrada, Torres, Quintero Figueroa y Abundiz (2009); Willits, Broidy y Denman (2013); Slocum, Rengifo, Choi y Herrman (2013).

²¹ Ver Levitt (2004).

²² Ver Zimring (2012).

4. Conclusiones

Este documento tuvo por objetivo mostrar el costo que tuvo para el país la delincuencia en el periodo 2000-2012, tomando en cuenta tanto el costo para el sector público como para el privado, continuando con la serie de otras investigaciones que, respecto de este tema, ha llevado a cabo Libertad y Desarrollo en los últimos años. El documento actual utiliza como base la metodología de trabajos anteriores de Libertad y Desarrollo.

Entre las principales conclusiones del estudio destacan:

- El costo total de la delincuencia en Chile para 2012 llega a \$ 2.908.072 millones o US\$ 5.978 millones, lo que representa un 2,23% del PIB de ese año y un costo per cápita de US\$ 343. Asimismo, es relevante notar que en el año 2000 este costo total llegaba a los \$ 1.069.365 millones o US\$ 2.198, y desde la perspectiva per cápita llegaba a los US\$ 142. Lo anterior implica que el costo total de la delincuencia aumentó entre 2000 y 2012 en un 172%.
- Si se analiza la composición del costo de la delincuencia, puede observarse que en 2012 el costo para el sector público llegó a los \$ 1.848.948 millones o US\$ 3.801, aumentando en 188% respecto del año 2000 cuando llegó a los US\$ 1.319 millones. Si se analiza el gasto público per cápita éste pasa desde casi los US\$ 86 el 2000 a los US\$ 218 el 2012.
- Asimismo, si desagregamos el gasto público por institución, se observa que en 2012 los mayores recursos públicos han sido asignados a Carabineros de Chile con US\$ 1.590 millones (41,85%); Gendarmería con US\$ 532 millones (14%); y Policía de Investigaciones (PDI) con US\$ 396 (10,4%).
- Por su parte, el gasto privado en delincuencia llegó durante el año 2012 a los \$ 1.059.124 millones o US\$ 2177 millones, aumentando respecto del 2000 en 147,6% cuando este gasto llegó a los \$ 427.610 millones o US\$ 879 millones.
- Asimismo, si se analiza la participación relativa del sector público y privado en el costo total de la delincuencia, es posible observar que esta es relativamente estable en el tiempo. Si comparamos el año 2000 vemos que la participación relativa del gasto público respecto al gasto total es de 60%, versus un 63,6% durante el 2012.
- Desde la perspectiva de cuán eficientes está siendo Chile en el uso de estos recursos, la respuesta es más bien mixta: si bien, bajo la medición de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) las disminuciones de victimización han sido relevantes, especialmente durante la



actual administración, la comparación internacional nos muestra todavía en una situación deficitaria en diversos delitos, principalmente aquellos contra la propiedad. Ello se relaciona con una serie de desafíos en materia de mejoras en gestión y rendición de cuentas de los órganos del sistema penal, pero en particular –déficit transversal a las políticas públicas en Chile– a la falta de una cultura de iniciativas basadas en la evidencia y en donde las evaluaciones de impacto de las mismas resultan clave antes de ampliar coberturas.

5. Referencias Bibliográficas

- Arzola, María Elena y García, José Francisco, (2008). "El Costo de la Delincuencia en Chile 2000-2007", Libertad y Desarrollo. Serie Informe Político N° 106, junio 2008.
- Beyer, Harald y Vergara, Rodrigo, (2006) "Delincuencia en Chile: Determinantes y Rol de las Políticas Públicas", Instituto de Economía UC, julio 2006.
- Cea, Macarena; Ruiz, Paulina y Matus, Jean Pierre. (2006). "Determinantes de la criminalidad: revisión bibliográfica", en Política Criminal, No. 2, D4, 2006, pp. 1-34.
- Cea, Macarena; Ruiz, Paulina y Matus, Jean Pierre. (2007). "Determinantes de la Criminalidad: Análisis de Resultados", en Política Criminal N° 3, D1, 2007, pp.1-80.
- De la Fuente, Hanns; Mejías, Claudia y Castro, Pía. (2011). "Análisis Econométrico de los Determinantes de la Criminalidad en Chile", en Política Criminal, Vol.6, No. 11.
- Estrada, Torres, Quintero Figueroa y Abundiz. (2009). "Perspectiva psicosocial en adolescentes acusados por delitos contra la salud y robo", en Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, vol.7, No.2.
- García, José Francisco, (2007). "Radiografía al Trabajo del Poder Judicial (2): Jurisdicciones Penal, Civil, Laboral, Familia y Constitucional", Serie Informe Político N° 103, septiembre 2007.
- Greene, Pía e Illanes, Ignacio, (2005) "Delincuencia 1990-2005: Evaluación Crítica y Propuestas", Libertad y Desarrollo, Serie Informe Político N° 91, agosto 2005.
- Gutiérrez, Mauro; Núñez, Javier y Rivera, Jorge. (2008). "Determinantes de la Criminalidad Reciente en Chile".
- Guzmán, Eugenio y Mora, Viviana, (2001). "El Costo de la Delincuencia en Chile 1994-1999", Serie Informe Político N° 70, Libertad y Desarrollo, marzo 2001.
- Guzmán, Eugenio y García, José Francisco, (2003). "El Costo de la Delincuencia en Chile 1994-2002", Libertad y Desarrollo, Serie Informe Político N° 79, julio 2003.

- Hagan, John y Rut Peterson (1995), "*Crime and Inequality*", Stanford University Press.
- Lee Mira, Jorge (Leemira Consultores Asociados) "Oferta de la Industria de Seguridad Privada en Chile". (I, II, III, IV y V) (2004, 2005, 2006, 2008 y 2011).
- Levitt, Steven D. "*Understanding Why Crime Fell in the 1990s: Four Factors that Explain the Decline and Six that Do Not*", en Journal of Economics Perspectives, Vol. 18, N°1, pp. 163-90.
- Lynch, James (2007): "*Crime in International Perspective*" en James Q. Wilson y Joan Petersilia: *Crime. Public Policies for Crime Control* (California: ICS).
- Libertad y Desarrollo (2011): "Encuesta de Victimización de Paz Ciudadana: Luces Amarillas", Tema Público N° 1023, julio 22, 2011.
- Libertad y Desarrollo (2011): "La Ruta de la Impunidad", Tema Público N° 1.037, octubre 28, 2011.
- Libertad y Desarrollo (2011): "Recursos para el Ministerio Público y eficiencia de la labor de los fiscales", Tema Público N° 1039, noviembre 11, 2011.
- Libertad y Desarrollo (2012): "Perfeccionamiento al Sistema Procesal Penal: Evaluación del Informe de Expertos", Tema Público N° 1088, noviembre 16, 2012.
- Matus, Jean Pierre. (2005). "¿Por qué no bajan las tasas de criminalidad en Chile?" Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XXVI, semestre I, pp. 67 – 92.
- Mertz, Catalina, (1997). "Costo de la Delincuencia: Chile 1996", Fundación Paz Ciudadana, junio 1997.
- Olavarría, Mauricio, (2005). "Costos Económicos del Delito en Chile", Ministerio del Interior y Universidad de Chile, noviembre 2005.
- Rivera, Jorge; Núñez, Javier y Villavicencio, Xavier. (2004). "Crimen y Disuasión: Evidencia desde un modelo de ecuaciones simultáneas para las regiones", [El Trimestre Económico](#), , vol. LXXI (4), Issue 284, pp. 811-846.
- Rosenfeld, Richard (2013), "*Economics and youth violence: Crime, disadvantage, and community*", NYU Press.

- Slocum, Rengifo, Choi y Herrman, (2013). *"The elusive relationship between organizations and crime: An assessment across disadvantaged areas of the south Bronx"*, Vol 51, Issue 1, pp. 167-216.
- Van Dijk, Jan, John Van Kesteren y Paul Smith (2007). *Criminal Victimization in International Perspective: Key Findings from the 2004-2005 ICVS and EU ICS* (UN).
- Willits, Broidy y Denman. (2013). *"Schools, Neighborhood Risk Factors, and Crime"*, Crime & Delinquency vol. 59 no. 2, marzo 2013, 292-315.
- Zimring, Franklin E. (2012). *"The City that Became Safe"*, Oxford University Press.



Serie Informe Justicia

Últimas Publicaciones

- N° 13** **Activismo Judicial: Teoría y
Práctica en el Sector Salud**
José Francisco García G.
Sergio Verdugo R.
Julio 2013
- N° 12** **Cárceles Concesionadas.
Revitalizando el Modelo**
Eliana Claro E.
Noviembre 2012
- N° 11** **Resultados en ENUSC 2005-2011.
Bases para Descentralizar el
Combate a la Delincuencia**
Eliana Claro E.
Agosto 2012



www.lyd.org



Visite nuestro sitio www.lyd.org

Más de 10 mil documentos, estudios, libros y presentaciones en temas económicos, sociales, políticos, legislativos, jurídicos y medioambientales.



PEDRO DE VILLAGRA 2265, VITACURA
SANTIAGO DE CHILE
FONO: (56-2) 377 4800
LYD@LYD.ORG

